

66001310500120240004200 - GLORIA ESTRELLA NARANJO GRISALES - Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

Lina Morales Lenis <mmaabogado12@gmail.com>

Mar 6/08/2024 2:07 PM

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Risaralda - Pereira <lcto01per@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (143 KB)

CERTIFICACION COMITE GLORIA ESTRELLA NARANJO GRISALES.pdf;

Buena tarde,

Me permito remitir certificación del comité de conciliación de Colpensiones, que se pronunció sobre el proceso identificado en el asunto del correo electrónico.

Anexo en formato PDF un (1) memorial y certificación.

--

Lina María Morales Lenis
Abogada Externa Colpensiones
MUÑOZ MEDINA ABOGADOS SAS

Pereira, seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Doctora

RUTH CLEMENCIA ZULUAGA ARISTIZABAL
JUEZ PRIMERA LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA
E.S.D.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
RADICADO: 66001310500120240004200
PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: GLORIA ESTRELLA NARANJO GRISALES CC. 42092958
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

LINA MARIA MORALES LENIS identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.088.291.344 de Pereira, Risaralda, portadora de la T.P. No. 254.522 del C. S de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderada Sustituta de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, de conformidad con el poder a mi conferido de manera respetuosa me permito allegar la certificación expedida por el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad dentro del proceso de la referencia.

Agradezco su atención,



LINA MARIA MORALES LENIS
CC. 1.088.291.344 de Pereira, Risaralda.
TP. 254.522 del C.S de la J.

CERTIFICACIÓN NO. 110362024

La secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 113-2024 del 26 de junio de 2024 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del proceso bajo radicado No **66001310500120240004200** instaurado por el (la) ciudadano(a) **GLORIA ESTRELLA NARANJO GRISALES** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **42092958**, quien pretende: Determinar si el Señor JOSE IGNACIO RODRIGUEZ VILLANUEVA, le asiste el derecho de la declaratoria la ineficacia del traslado realizado del Régimen de Prima Media administrado en la actualidad por COLPENSIONES, al Régimen de Ahorro Individual en este caso administrado por SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A y su posterior traslado horizontal a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, dicho órgano decidió:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Sobre las pretensiones de la parte demandante debe decirse que no tienen fundamento en atención a lo siguiente:

En primer lugar, que a la fecha, el traslado realizado por parte del demandante a SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A, en el mes de noviembre de 1996, se presume no solo efectuado en ejercicio del derecho de libre escogencia de Régimen Pensional consagrado en el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 sino plenamente valido por haberse realizado conforme a las exigencias legales y normativas vigentes a dicha data, es decir, a lo establecido en el Decreto 663 de 1993, Decreto 656 de 1994 y artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, razón por cual la afirmación de vicio del consentimiento, la falta de información necesaria y/o ineficacia acaecido en el trámite de traslado alegado por el interesado, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial.

En segundo lugar, que conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la parte actora no se encuentra dentro del límite temporal allí consagrado para efectuar traslado alguno entre regímenes pensionales, dado que en la actualidad cuenta con (61) años teniendo en cuenta que nació el día (25) de diciembre de (1963).

EL DEMANDANTE no está amparado por el régimen de transición pues al trasladarse perdió el mismo y por tanto no puede regresar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, debió hacerlo cuando le faltaran menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión, pero como la solicitud la elevo cuando tenía 60 años y cumplir ya casi con el requisito de la edad, por ende ya no puede regresar al régimen administrado por COLPENSIONES.

Además, en caso de que deseen retornar al régimen de prima media, por considerar que les resulta más favorable a sus expectativas de pensión, no podrán hacerlo si les faltan 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, en virtud la exequibilidad condicionada del artículo 13 de la ley 100 de 1993, declarada en la sentencia C-1024 del 2004. (Corte Constitucional, sentencia SU -130, Mar. 13/13, Gabriel Eduardo Mendoza).

En tercer lugar, la eventual afiliación del accionante al Régimen de Prima Media, el traslado de los aportes al régimen en mención y la actualización de su Historia Laboral depende de la decisión favorable que previamente obtenga respecto de la pretensión de declaratoria de ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual efectuada, a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A en el año de 1996 y posterior traslado horizontal entre regímenes a la AFP COLFONDOS S.A .

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2002 y SU-062 de 2010, en concordancia con el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 3995 de 2008, señaló que las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995 en el caso de servidores públicos del orden territorial) ostenten 15 años de servicio y/o cotizaciones, conservarán el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado el afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, incluyendo lo que la persona aportó al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media con prestación definida.

En ese orden de ideas, sólo las personas que a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) conservarán el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, cuando cumplan los requisitos anteriormente señalados.

De acuerdo con lo señalado, el Señor JOSE IGNACIO RODRIGUEZ no acreditó 15 años de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) al 01 de abril de 1994, de igual modo, para dicha fecha contó con una edad de 31 años, teniendo en cuenta que el demandante nació el día 07 de abril de 1962, no cumpliendo con el requisito consagrado dentro del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concluyéndose así, que no es beneficiario del régimen de transición.

En cuarto lugar, debe considerarse lo manifestado en la Sentencia SL 1452 de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, en relación a que en la Aclaración de Voto del Magistrado Rigoberto Echeverry Bueno se indicó que “En mi concepto la ineficacia del traslado no puede predicarse respecto de todos los casos, de manera automática e inconsulta, sino que depende de que las falencias en la información o inexistencia del consentimiento informado hubieran producido un perjuicio claro, cierto y específicamente determinable para el afiliado en el momento en que se produjo el traslado,

como cuando quien pierde el régimen de transición sin ser advertido de ello o cuando se compromete ostensible e inconscientemente el nacimiento del derecho pensional”. En el mismo sentido indicó que “En otras palabras, los afiliados no deberían estar autorizados para demandar la ineficacia del traslado simplemente porque, pasado el tiempo, su plan de pensión no resultó acorde con sus aspiraciones. Contrario a ello, estimo prudente que se analicen las circunstancias particulares de cada caso y que no se establezcan o reivindiquen reglas generales o automáticas, que minan la estabilidad del sistema pensional y desconocen principios fundamentales como la autonomía de la voluntad y la libre escogencia de régimen”.

De lo anterior se colige que la declaratoria de ineficacia del traslado de Régimen Pensional no opera de pleno derecho, sino que requiere que se analice en cada caso específico si se cumplió o no por parte de la AFP con sus obligaciones legales y si tal omisión generó en el caso concreto un perjuicio tal que merezca un reproche judicial con tal declaratoria.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta lo manifestado en la Aclaración de Voto del Magistrado Carlos Quiroz Alemán quien en la misma sentencia previamente enunciada manifestó que “Entre las deficiencias que puede afectar la validez del acto de traslado, existen, como quedó expuesto, unas susceptibles de saneamiento, de manera que no todos los defectos en la formación del acto jurídico darán lugar a la nulidad del mismo, pues en cada caso en particular habrá que determinarse si hubo o no saneamiento del defecto en la decisión, de manera que no pueden generarse expectativas ni reglas generales de nulidad de traslado”.

De lo citado, se extrae que no cualquier afirmación de lo acaecido en el acto de traslado tiene el efecto y potencial de generar la nulidad del mismo, pues existen unos que pueden sanearse bien por el paso del tiempo o por actos positivos de convalidación del afiliado como lo es el hecho de efectuar traslados entre AFP, simulaciones o proyecciones pensional o Reasesorías.

En quinto lugar, y siguiendo la misma línea de lo expuesto previamente, la misma corporación en Sentencia SL 413 de 2018 con ponencia de Clara Cecilia Dueñas Quevedo indicó que “Por esta misma razón, en casos como en el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen. Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación u cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella.

Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado”. Finalmente, la petición de anulación de traslado de Régimen Pensional de aquellos afiliados que se encuentran en la prohibición de traslado del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, conforme a lo indicado en la Sentencia SU 062 de 2010, atenta contra la Sostenibilidad Financiera del Sistema en el entendido que “el objetivo perseguido con el

señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...).

Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que, una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas.

Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social".

De las anteriores consideraciones, se concluye que las pretensiones no están llamadas a prosperar y en ese sentido no habría lugar a proponer formula conciliatoria.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 27 días del mes de junio de 2024.



MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ
Secretaria Técnica
Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Proyecto: SMPL